



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: LUZ MARINA RÚA MESA  
Demandados: ACP COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.  
Radicado: 05360 31 05 002 2022 00080 01  
Sentencia: S-170

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el grado jurisdiccional de Consulta a favor de Colpensiones con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí el día 25 de noviembre de 2022, puesto que la misma no fue recurrida por las partes.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

LUZ MARINA RÚA MESA demandó a COLPENSIONES y PORVENIR S.A., pretendiendo se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual –RAIS- administrado por PORVENIR S.A. y se ordene la inmersión en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –

RPMPD- en la ACP COLPENSIONES; pide asimismo se condene a trasladar a Colpensiones el 100% de las cotizaciones bonos, rendimientos; así como los gastos de administración, la prima de reaseguros, el pago del fondo de garantía de pensión mínima, todo debidamente indexado.

Solicita se condene al pago de costas y agencias en derecho.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones, que se afilió al RPMPD que administraba el Instituto de Seguros Sociales –ISS- hoy Colpensiones en diciembre de 1994; el 21 de mayo de 1998 un asesor de PORVENIR S.A. le hizo suscribir un formulario de afiliación sin explicarle los pro y contra de tomar esa decisión, nunca se detuvo a advertirle las características de los regímenes pensionales RPMPD y RAIS con el fin de que tuviera la oportunidad de escogencia.

Al momento de la afiliación no se le hizo una asesoría personalizada, no le dijeron cuál era su régimen para saber los requisitos de la edad, tiempo y monto de la pensión de vejez, cuál era la situación del bono pensional y si efectivamente podía pensionarse anticipadamente, cómo tendría que estar cotizando para la garantía de pensión mínima, entre otros aspectos.

Agrega que presentó solicitud ante PORVENIR S.A. sobre la proyección de su pensión; el 29 de marzo de 2022 pidió a Colpensiones el traslado de régimen, siéndole negado bajo el argumento que le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES dice que es cierta la fecha de afiliación de la actora a esa entidad pues así lo corrobora la historia laboral, la

petición de traslado presentada por la demandante y su negativa. Sobre los demás hechos manifiesta que no le constan toda vez que son situaciones externas a Colpensiones y sobre las cuales no tienen incidencia. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones bajo el argumento que el acto jurídico de traslado se presume válido hasta tanto se demuestre la existencia de un vicio en el consentimiento, además de que el mismo se celebró de forma libre y voluntaria.

Como excepciones propuso, carga dinámica de la prueba, inexistencia de la obligación respecto al traslado, prescripción, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, falta de legitimación en la causa para pedir, presunción de legalidad en la causa para pedir, presunción de legalidad de los actos administrativos, buena fe, imposibilidad de condena en costas, excepción innominada, compensación, devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntarios debidamente indexados.

Por su parte PORVENIR S.A. al contestar, dice que no es cierto las condiciones de traslado a esa AFP como las expone la demandante mediante engaños, pues fue un acto propio de aquella la afiliación al RAIS; el formulario de afiliación suscrito por la actora el 21 de mayo de 1998 es evidencia de la libre escogencia al RAIS, después de haber recibido información clara, precisa, veraz y suficiente acerca de las condiciones y características de ese régimen. Agrega que puso de presente las ventajas del régimen de ahorro individual, considerándose válido el traslado. En los mismos términos se opuso a las pretensiones de la demanda. Como excepciones propuso prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación, excepción genérica.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 25 de noviembre de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí tomó las siguientes decisiones:

*PRIMERO: Se DECLARA la Ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad (sic) través de PORVENIR S.A. efectuado por la señora LUZ MARINA RÚA MESA (...)*

*SEGUNDO: Se DECLARA que la señora LUZ MARINA RÚA MESA, (...) se encuentra válidamente afiliada en COLPENSIONES sin solución de continuidad. En consecuencia, se CONDENA a las AFP PORVENIR S.A. a trasladar los dineros de la cuenta de ahorro individual y los respectivos rendimientos financieros a COLPENSIONES, así mismo las cuotas de administración, el concepto de primas de seguros previsionales, y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión mínima que afectaron el valor de la cotización obligatoria durante la vigencia de la afiliación a cargo del patrimonio de las administradora, con todos sus frutos e intereses y los rendimientos sin deducción alguna, como lo dispone el art. 1746 del CC.*

*TERCERO: Se ORDENA a COLPENSIONES a validar la afiliación de la demandante, y recibir el traslado de los dineros de la cuenta de ahorro individual por parte de las AFP.*

*(...)*

*QUINTO: Se CONDENA en costas a la AFP PORVENIR S.A., quien deberá asumir como agencias en derecho la suma de \$1.500.000. Se abstiene el despacho de condenar en costas a Colpensiones por las razones indicadas en la parte motiva de esta decisión."*

Se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Se advierte que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el respectivo traslado las partes el apoderado judicial de la parte demandante presentó alegatos de conclusión solicitando sea confirmada la sentencia de primera instancia reiterando que, quedó probado que el fondo privado no brindó la información que su deber le imponía al momento de suscribir el formulario de afiliación. Dice que la asesoría que debe brindar la AFP en la etapa previa a la formalización, no solo debe ser completa y

comprensible para el afiliado, sino que trasciende el deber de buen consejo. A la demandante al momento de la afiliación no se le realizó ni calculo, ni proyección alguna, generándole un daño patrimonial y moral respecto a su expectativa pensional.

COLPENSIONES por su parte en los alegatos de conclusión dice que, en los casos de ineficacia de traslado se deben tomar las medidas pertinentes para la protección de los recursos que soportan el sistema pensional, imponer una carga en cabeza de Colpensiones tiene un impacto lesivo para la sostenibilidad del sistema, pues esa AFP alberga el número más alto de pensionados, siendo un desmedro económico; por lo anterior solicita se revise la decisión tomada por el Juez de Primera Instancia.

Manifiesta que de confirmarse el traslado, se realice la devolución y reintegro de los recursos de la cuenta individual, las cuotas de administración, lo del fondo de garantía de pensión mínima, el porcentaje destinado al pago de seguros; conceptos que pide sean trasladados de manera indexada.

PORVENIR S.A. alega respecto a la ineficacia que no se probó la nulidad del actor jurídico del traslado, por lo que tiene plena validez; indica que esa AFP como administradora garantizó a la parte demandante la posibilidad de retornar al RPMPD pues dispuso los canales de comunicación suficientes para ello; la demandante en ejercicio de su derecho de escogencia optó por suscribir el formulario de afiliación a esa AFP, es decir de manera libre y voluntaria.

De otro lado, dice que en el evento de declararse la falta al deber de información, no se puede ordenar la devolución de los rendimientos, gastos de administración y de seguros; también alega la orden de indexación de esos conceptos dispuesta en la decisión de primera instancia argumentando que, los recursos de la cuenta de ahorro individual de la demandante no se han visto afectados por la inflación,

por el contrario han generado rendimientos muy superiores a los que garantiza el RPMPD.

### **CONSIDERACIONES:**

Se procede a conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, toda vez que las partes no recurrieron la decisión de primera instancia.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: *i)* la Sra. LUZ MARINA RÚA MESA nació el 19 de mayo de 1967; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional régimen de prima media en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ISS- y realizó cotizaciones allí desde el 23 de diciembre de 1994; *iii)* el 21 de mayo de 1998 suscribió formulario de afiliación o traslado ante la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., efectivo a partir del mes de julio de ese mismo año, entidad en la que se encuentra actualmente afiliada.

#### **Ineficacia del traslado.**

La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que

los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>1</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado”.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 273 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

---

<sup>1</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

*"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquella pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, se

afilió en 1994 porque fueron a la empresa; sobre la asesoría realizada por la AFP PORVENIR S.A. a la demandante relacionada con, la cuenta de ahorro individual, la pensión anticipada, cuáles eran los requisitos para acceder a una pensión con PORVENIR, las características de los regímenes, la Sra. LUZ MARINA manifestó no haber recibido ninguna información sobre eso.

De lo anterior no se deriva -entonces- que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador"*.

Ahora bien; tampoco es de recibo el argumento de COLPENSIONES en cuanto en los alegatos de conclusión solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció la demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía

de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso de la demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que la demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

### **Conceptos a devolver.**

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como

la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada más recientemente en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Se advierte igualmente que la orden a la AFP PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas y/o gastos de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de dicha entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara SL 3349 del 28 de julio de 2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *“... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.”*

Por tal razón, la sentencia de primera instancia será **ACLARADA** en este aspecto, puesto que la Juez de Primera Instancias tanto en la parte considerativa como resolutive dijo que los conceptos serían trasladados *“sin deducción alguna, como lo dispone el art. 1746 del CC.”*, sin puntualizar sobre la indexación.

Ahora bien, tampoco resulta procedente en este caso la declaratoria de prescripción toda vez que no se cumplen las condiciones para tal efecto según ha sido tratado en múltiples providencias como por ejemplo en la sentencia SL 2058 del 4 de mayo de 2022, rad. 89282:

*“En cuanto a la excepción de prescripción, se reitera que la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, en la medida que esta declaración tiene como objetivo comprobar o constatar un estado de cosas -carencia de efectos jurídicos del acto desde su nacimiento- surgido con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360-2019 y CSJ SL373-2021).”*

Además, tampoco puede hablarse de prescripción de los dineros descontados por concepto de cuotas de administración, seguros y reaseguros y fondo de garantía de pensión mínima, toda vez que

cualquier obligación que surja a cargo de la respectiva AFP, como ciertamente lo es la de restituir estos conceptos, se origina con la declaratoria de ineficacia del traslado que solo se produce con la ejecutoria de la sentencia, sumado al hecho de que tales conceptos están llamados a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación, y en consecuencia, al estar ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado no pueden estar sometidas a la prescripción.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí el día 25 de noviembre de 2022. La **ACLARA** en el sentido de que la orden a la AFP PORVENIR S.A. de devolución de las cuotas de administración, aportes para la garantía de pensión mínima y los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, deben incluir la respectiva INDEXACIÓN.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3efc7edc1ab403ff2a62a62b35914b4a2339f8ccb371c8539b617d1ccbf00984**

Documento generado en 16/06/2023 01:21:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>